

RESOLUCIÓN No. 20250212752 DEL 23 DE ABRIL DE 2025
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCESO CONTRAVENCIONAL POR INFRACCIÓN A UNA NORMA DE TRÁNSITO”

PRESUNTO CONTRAVENTOR: DIEGO MAURICIO TAMAYO RODRIGUEZ	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 6136244	
COMPARENDO No. 999999900006132235	INFRACCIÓN (F)
FECHA: 11-12-2024	GRADO UNO (1)
VEHICULO VINCULADO: MOTOCICLETA.	PLACA : GPM-112
AUDIENCIA DESCARGOS: No compareciente.	

En Palmira – Valle, a los veintitrés (23) días del mes de ABRIL de 2025, siendo las 09:18 horas. El suscrito Inspector Segundo de Tránsito y Transporte de Palmira – Valle, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en los artículos 24, 29 y 209 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 769 de 2002 “Código Nacional de Tránsito Terrestre”, modificado por la Ley 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones”, Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, Ley 1696 de 2013 y el Decreto Municipal 922 de 2020 “Por el cual se adopta el Manual de Funciones y Competencias para los Empleos de la Planta de Personal de la Administración de Palmira”, procede a constituirse en Audiencia pública y expide la presente Resolución, teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

El día 11-12-2024, la Autoridad de Tránsito EDILSON PUCHA IQUIRA, identificado con Placa 107052, le realizó Orden de Comparendo No.999999900006132235, al Señor DIEGO MAURICIO TAMAYO RODRIGUEZ, identificado con C. C. No. 6136244, imputándole la comisión de la infracción establecida en el Código F, artículo 4° de la Ley 1696 de 2013, el cual modificó el artículo 131 de la Ley 769 de 2002 “Código Nacional de Tránsito Terrestre”, (Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este Código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa y el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado. El estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses), comparendo realizado en la Vía KM-5, vía cali, andalucía. DE PALMIRA–, vehículo de placa GPM-112. Encontrándose para el presente caso, en **GRADO UNO DE EMBRIAGUEZ**.

DESARROLLO PROCESAL

1. Que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 135 y 136 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010, el día 17 DE DICIEMBRE DE 2024, **CONTABA CON SU AUDIENCIA DE DESCARGOS, fecha en la que no se presento, se reprogramo diligencia para el día 23 DE ENERO DE 2025**, en la cual se enuncio que iniciara, la diligencia de descargos, ofreciendo las garantías a el contraventor. **EL 23 DE ENERO DE 2025**, el presunto contraventor **DIEGO MAURICIO TAMAYO RODRIGUEZ, TAMPOCO SE PRESENTÓ**, por lo que la Inspección Segunda de Tránsito y Transporte, con el fin de dar tramite al proceso apertura audiencia para versión voluntaria, libre y espontánea, y como no se encuentra en la diligencia se levanta el procedimiento acorde al **ART 136, de la ley 769 de 2002, como no compareciente**, sobre los hechos que dieron origen a la misma, por lo que se abrió audiencia pública, en dicha audiencia, Se decretaron las pruebas obrantes en el expediente y se ordenó suspender la diligencia con el fin de dar apertura a la etapa probatoria.

- 2.** Mediante Auto No. **2025.0006**, del **23-01-2025**, se dio apertura a la etapa probatoria, donde se incorporó como elemento probatorio de las que se corrió traslado:
" **1 Solicitar información en el runt sobre su correo electrónico y dirección.**
2 vincular y tener en cuenta , 2 test el 381 y 382 , lista de chequeo, formato declaración de aseguramiento, y entrevista previa., Formato de retención, oficio de la policía. .. "
- 3.** Evacuado el material probatorio y el trámite procesal correspondiente, esta inspección de tránsito procede a realizar la valoración integral de las pruebas obrantes dentro del plenario, no sin antes hacer referencia a la versión libre rendida por el presunto contraventor en los siguientes términos:

DE LA VERSIÓN LIBRE RENDIDA POR EL PRESUNTO CONTRAVENTOR

El presunto contraventor **DIEGO MAURICIO TAMAYO RODRIGUEZ** toda vez que **no se presento** a la diligencia, mas y contando que no reposa en el correo escrito alguno, su displicencia o interés inferen su desdén frente al proceso. Asimismo, observa el despacho, que el actor no desvirtuó la conducta de conducir después de haber ingerido sustancias embriagantes y que ejercía la actividad de conducción sobre el vehículo de placa **GPM-112**.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a esta autoridad de tránsito establecer con base en el material probatorio recaudado si la conducta desplegada por el señor **DIEGO MAURICIO TAMAYO RODRIGUEZ** , se enmarca o no en la infracción a las normas de tránsito contemplada en el artículo 4° de la Ley 1696 de 2013, el cual modificó el artículo 131 de la Ley 679 de 2002, a saber: "**F. Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este Código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa y el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado.**" Además de las sanciones contempladas en el artículo 5° - de la Ley 1696 de 2013, tipificada como **GRADO 1**.

VALORACIÓN PROBATORIA

Este despacho procede a realizar la respectiva valoración de las pruebas obrantes dentro de la investigación. Para ello se hace necesario, en virtud del artículo 162 del Código Nacional de Tránsito y Transporte que permite, por compatibilidad y analogía normativa, para aquellas situaciones no reguladas en dicho código pueda hacerse uso de aplicación de aquellos ordenamientos jurídicos que así lo establezcan, remitirnos al artículo 176 del Código General Del Proceso Ley 1564 de 2012, el cual reza:

"ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba".

Por su parte, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-202 de 2005, se refirió a la sana crítica de la siguiente manera:

"Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen, de igual manera, a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana), con arreglo a la sana razón y aun conocimiento experimental de las cosas".

Ante este panorama, el asunto debe ser decidido con fundamento en la apreciación de las pruebas, Por consiguiente se tendrán en cuenta los medios de prueba de que trata el Código General Del Proceso - Ley 1564 de 2012, (Artículos 164 y s.s. Régimen Probatorio), cuestión de hecho que cae bajo el poder discrecional de que goza el operador jurídico de instancia, con fundamento claro está, en las reglas de la sana crítica conforme lo exige el artículo 176 del Código de General del Proceso, las cuales son apreciadas y valoradas en los siguientes términos:

- 1) Test el 381 y 382 , lista de chequeo, formato declaración de aseguramiento, y entrevista previa., Formato de retención, oficio de la policía. .. "**

Podemos observar que la resolución 1844 estipula, contar con personal idóneo, equipo certificado, la notificación del mismo, condiciones que motivaron a la autoridad de tránsito a establecer dentro del análisis, y de acuerdo a los conceptos estipulados, realizar la notificación de una orden de comparendo.

SENTENCIA T 616 DE 2006. 4. Del debido proceso administrativo. Reiteración de jurisprudencia

La Constitución Política, en su artículo 29, prescribe que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. En virtud de tal disposición, se reconoce el principio de legalidad como pilar en el ejercicio de las funciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas, razón por la cual, están obligadas a respetar las formas propias de cada juicio y a asegurar la efectividad de todas aquellas normas que permiten a los administrados presentar, solicitar y controvertir pruebas, formular peticiones y alegaciones, y que en últimas, garanticen el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

De esta manera, el debido proceso se define como la regulación jurídica que, de manera previa, limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley[4].

*Al respecto, la Corte determinó en la sentencia C-214 de 1994, con ponencia del dr. Antonio Barrera Carbonell, que:
“Corresponde a la noción de debido proceso, el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción.*

(...) En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional.”

Ahora bien, el debido proceso administrativo como derecho fundamental se manifiesta a través de un conjunto complejo de principios, reglas y mandatos que la ley le impone a la Administración para su ordenado funcionamiento (entre otros, se destacan las disposiciones previstas en el artículo 209 de la Constitución y en el capítulo I del Título I del C.C.A., referentes a los principios generales de las actuaciones administrativas), por virtud de los cuales, es necesario notificar a los administrados de las actuaciones que repercutan en sus derechos, otorgarles la oportunidad de expresar sus opiniones, y de presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos. Actuaciones que, en todos los casos, deben ajustarse a la observancia plena de las disposiciones, los términos y etapas procesales descritas en la ley.

2 DECLARACIÓN AUTORIDAD DE TRÁNSITO EDISON PUCHA

La autoridad de Tránsito **EDILSON PUCHA IQUIRA** que llevó a cabo la notificación de la orden de comparendo, manifestó en su declaración bajo juramento, respecto de su procedimiento, lo siguiente:

“... . **preguntado:** sírvase manifestar al despacho si observo o por que le consta que **diego mauricio tamayo rodriguez** era el conductor del vehículo camioneta, el día de los hechos **contesto- si señor. preguntado:** sírvase manifestar la despacho lo que recuerde o le conste. que acciones o actividad realizo el día 11-12-2024, frente al procedimiento de **diego mauricio tamayo rodriguez**. **contesto:** se notifica la realización el examen, el cual accede, y arroja positivo en grado uno. ... “

Por lo tanto, en virtud de los hallazgos descritos por el test 381 y 382 del 11-12-2024 al momento de la prueba, el despacho puede concluir que el funcionario cuenta con un medio legalmente establecido para establecer el grado de alcohol, donde se vislumbra que la autoridad de tránsito encontró que el resultado encaja con el criterio de medición donde la pareja coincide para establecer el grado uno en alcoholemia.

El alcohosensor fue operado por una autoridad de tránsito, capacitado para tal acto, Así mismo, el despacho aclara que en esta diligencia, se observaron los principios constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa, pues a no dudar, el presunto contraventor gozó de todas las prerrogativas en lo tocante a la rendición de sus descargos, solicitando pruebas en su oportunidad procesal, de igual forma, están las pruebas de oficio solicitadas y recaudadas, las cuales fueron decretadas con base en los principios de conducencia, pertinencia y utilidad, distinto es el análisis y la valoración que se le da a las mismas, que de acuerdo con las reglas de la sana crítica y conforme con las circunstancias

de tiempo, modo y lugar, unas hayan tenido más valor o desvalor que otras, en conformidad con el juicio y raciocinio que en su momento desplegó el operador jurídico. Así las cosas, esta Inspección analizó las pruebas obrantes en el proceso y les dará el valor o desvalor que se merecen.

CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS DEL DESPACHO

Procede este despacho a realizar el análisis del caso concreto, no sin antes tener en cuenta lo siguiente:

Que el Artículo 29 de la Carta Política expone: **“El debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa”**.

Que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio...”

Que le Corresponde a las Autoridades de Tránsito velar por el cumplimiento del régimen normativo de tránsito y transporte, por la seguridad de las personas y cosas en la vía pública.

Que las funciones de policía de Tránsito serán de carácter preventivo, de asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías y de carácter sancionatorio, (amonestación, multa, suspensión de la licencia, etc., etc. Art 122 CNT) para quienes infrinjan las normas...” Artículo 8 Ley 105/93.

Que en virtud del artículo 150 del Código Nacional de Tránsito, las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez, que permita determinar si se encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o drogas, entre otras.

Habiéndose elaborado la orden de comparendo **No.9999999900006132235 del 11-12-2024** referenciada, en virtud del procedimiento establecido para estos efectos por los artículos 135, 136, 137, 138 y 139 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010, por incurrir presuntamente en lo contenido en el artículo 4° Literal F de la Ley 1696 de 2013, el cual modificó el artículo 131 de la Ley 679 de 2002, que dice **“Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este Código. Al Señor **DIEGO MAURICIO TAMAYO RODRIGUEZ**, conductor del vehículo de placa **GPM-112**, entra el despacho a determinar la responsabilidad del mismo, en los siguientes términos:**

En lo que respecta al presunto contraventor este desde su apatía y al sustraer el derecho a la defensa, no es otra condición que dejar a la existencia de los medios probatorios la resolución de la controversia, a lo que, se cuenta con las herramientas, conducentes, pertinentes y concretas que permiten determinar sin lugar a duda que el señor **DIEGO MAURICIO TAMAYO RODRIGUEZ**, se realiza el procedimiento estipulado en la RESOLUCION 1844 DE 2015 para alcoholemia, En los que se encuentran los test realizados al enunciado.

Por lo tanto, las pruebas evaluadas en el presente proceso gozan de total validez legal, toda vez que se logra encaminar a la existencia o presencia del contraventor que se identifica como conductor y al que se le realizan las pruebas de alcoholemia correspondiente.

Que de conformidad con el Código Nacional de Tránsito reza en su artículo 150 **“Examen. Las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez, que permita determinar si se encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas”** (...), considera también este despacho que es importante tener en cuenta que la actividad de conducir es una actividad peligrosa y como tal soporta unas cargas que debe llevar el conductor como de someterse a verificaciones por parte de las

autoridades de tránsito con el fin de controlar los riesgos que conlleva el ejercicio de la conducción tal y como lo expresa la H. Corte Constitucional¹:

“... En primer lugar, (i) es ampliamente reconocido por la jurisprudencia colombiana, que la actividad de conducción es una actividad peligrosa que justifica una intervención acentuada e intensa por parte de las autoridades con el propósito de controlar los riesgos que a ella se anudan y, en segundo lugar, (ii) como consecuencia de lo anterior existe una relación de especial sujeción entre los conductores y las autoridades de tránsito que permiten la imposición de obligaciones especiales, tal como es reconocido desde el artículo 1° del Código Nacional de Tránsito, en el que se establece que aunque todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, “está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público”. (...) La fijación de una obligación de acatamiento de las instrucciones impartidas por una autoridad de tránsito guarda correspondencia con el deber general de respetar a las autoridades del Estado. Este deber encuentra fundamento constitucional en el artículo 6° conforme al cual los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y en el artículo 95 que establece la obligación de toda persona de cumplir la ley y la Constitución. De hecho, existen disposiciones en otras áreas del ordenamiento jurídico que sancionan el incumplimiento de las órdenes dadas por las autoridades judiciales y administrativas. Así ocurre, por ejemplo, en el caso del tipo penal de fraude a resolución judicial, conforme al cual incurrirá en la pena allí prevista la persona que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa (art. 454)(...) De acuerdo con ello, reprochar administrativamente el incumplimiento de la orden dada por una autoridad a quien le ha sido atribuida la competencia para impartirla resulta, en principio, plenamente compatible con la Constitución. En esa dirección, el deber de respeto de las decisiones adoptadas por las autoridades en ejercicio del poder público, es una condición necesaria para la existencia del Estado de Derecho. Las personas, en tanto titulares de derechos, tienen la obligación de asumir ese tipo de responsabilidades (...) Cumplir el requerimiento hecho por las autoridades de tránsito para la realización de las pruebas físicas o clínicas orientadas a determinar la presencia de alcohol en el cuerpo de un conductor, persigue una finalidad constitucional de alto valor en tanto las autoridades pueden controlar los riesgos asociados a la conducción y, en particular, a la intensificación de los mismos cuando ello se hace bajo los efectos del alcohol. Por consiguiente, fijar sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de realizarse las pruebas físicas o clínicas, tiene como objetivo obstaculizar la afectación de diferentes intereses constitucionales, entre ellos la vida y la integridad personal, mediante el control de una fuente de riesgo. Este tipo de medidas, cuando son establecidas han sido denominadas por algún sector de la dogmática como infracciones obstáculo, en tanto tienen por finalidad suprimir un supuesto fáctico que de actualizarse generaría una amenaza de bienes jurídicos importantes. Tal tipo de regulación, aunque pueda dar lugar a otros debates constitucionales no planteados en esta oportunidad, es compatible con la Carta, siempre y cuando sean necesarios para proteger intereses de especial valía constitucional(...) Cuando las personas adoptan la decisión de conducir vehículos automotores aceptan integrarse a una relación de especial sujeción respecto de las autoridades de tránsito, que las habilita para prevenir y sancionar los comportamientos que afectan o agravan la seguridad del tránsito. Los conductores, entonces, deben asumir que las autoridades de tránsito intervengan en cualquier momento, dentro de los límites fijados en la ley, para asegurar que el ejercicio de esta actividad peligrosa se desarrolle en condiciones adecuadas. En esa dirección, imponer el deber de practicarse los exámenes físicos y clínicos, bajo la amenaza de una sanción, constituye un instrumento valioso. Se trata, reitera la Corte, de una consecuencia derivada de la decisión de emprender el ejercicio de una actividad peligrosa en la que la prevención constituye uno de los ejes cardinales. (...) Impedir la adopción de esta medida legislativa equivaldría a aceptar que los otros conductores y peatones deban someterse, ante la negativa de practicarse la prueba, a participar en el tránsito con sujetos que debido al consumo de alcohol incrementan exponencialmente los riesgos de afectación de la vida e integridad de las personas(...).

Resulta pertinente aclarar que la autoridad de tránsito es un “funcionario o persona civil que está investida de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales” por lo anterior, es deber de esta Autoridad que los hechos imputados por un agente de tránsito en una orden de comparendo.

Es por ello que el debate probatorio se centra en establecer si para el día y hora de los hechos el señor **DIEGO MAURICIO TAMAYO RODRIGUEZ**, era el conductor del vehículo de placa **GPM-112**. Para ello, el despacho valoró cada una de las pruebas del plenario y encontró coherencia entre cada una de ellas, pues las mismas les otorgan a este juzgador elementos de juicio a fin de determinar que al aquí impugnante se le realizó un procedimiento de tránsito ajustado a los preceptos legales que rigen la materia de tránsito.

Ahora bien, es preciso aclarar que para que haya lugar a la sanción establecida en los artículos 4° y 5° de la Ley 1996 de 2013, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos a saber:

¹ Sentencia C-633-14; M.P. Mauricio González Cuervo; 03 de septiembre de 2014; Corte Constitucional de Colombia.

1. **Que el presunto contraventor para el momento de los hechos se encontrase conduciendo el vehículo de la referencia:** acto que se evidencia con la emisión de la orden de comparendo a persona individualizada. Que relaciono que el presunto contraventor se encontraba conduciendo el automotor de placa **GPM-112**.
2. **Que el presunto contraventor siendo el conductor del vehículo y pese a ser requerido por las autoridades de tránsito, con plenitud de garantías permitió la realización de la prueba físicas o clínicas a que se refiere la ley 1696 de 2013.** Como ya se explicó con anterioridad y como quedó probado con las dos prueba con alcohosensor No. 381 y 382, los cuales dieron positivo para GRADO UNO (1).

Así las cosas, este despacho considera conforme lo aquí expuesto que, dentro de los fines específicos del proceso contravencional desarrollado con diligencia y cuidado, quedaron claras las siguientes circunstancias: a)- Que la conducta es típica, b)- Que existe responsabilidad de parte del autor, c)- Las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se desarrolló la contravención y d)- La relación de causalidad entre el agente y el hecho.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta las pruebas analizadas y valoradas en ésta investigación, éste despacho encuentra más allá de toda duda razonable que el señor **DIEGO MAURICIO TAMAYO RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6136244 de Palmira - Valle, para el día y hora en que fue requerido por la autoridad de policía, se encontraba conduciendo el vehículo de placa **GPM-112** encontrándose en el artículo 5, parágrafo 3 de la Ley 1696 de 2013.

En cuanto a los alegatos de conclusión, el señor **DIEGO MAURICIO TAMAYO RODRIGUEZ**, a pesar de contar con los medios para su defensa para lo correspondientes, no presento escrito alguno.

NORMAS INFRINGIDAS

El actuar desplegado por el **CONDUCTOR** (a) conlleva al quebrantamiento de lo dispuesto en los preceptos mencionados y muy en particular a los contenidos en los siguientes articulados:

Artículo 4° Ley 1696 de 2013. Multas. Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción, así:

F. Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este Código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa y el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado.

Ley 1383 de 2010 art 7 Parágrafo. Modificado por el Art. 3 de la Ley 1696 de 2.013, La suspensión o cancelación de la licencia de conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente para imponer la sanción por el período de la suspensión o a partir de la cancelación de ella.

La resolución de la autoridad de tránsito que establezca la responsabilidad e imponga la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, deberá contener la prohibición expresa al infractor de conducir vehículos automotores durante el tiempo que se le suspenda o cancele la licencia. (...)

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

Art. 153 del C.N.T.T. “Para Efectos legales se entenderá como resolución judicial la providencia que impone una pena de suspensión de licencia de conducción”.

Artículo 5° Ley 1696 de 2013. Sanciones y grados de alcoholemia. Si hecha la prueba, se establece que el conductor se encuentra en alguno de los siguientes grados de alcoholemia, incurrirá en las sanciones respectivas, según el nivel de reincidencia correspondiente de conformidad con lo indicado a continuación para cada evento:

Primer grado de embriaguez, entre 40 y 99 mg de etanol/100 ml de sangre total, se impondrá:

2.1. Primera Vez

2.2.1. (sic) Suspensión de la licencia de conducción por tres (3) años.

2.1.2. Multa correspondiente a ciento ochenta (180) salarios mínimos diarios legales vigentes (sdmlv).

2.1.3. Realización de acciones comunitarias para la prevención de la conducción bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas, durante treinta (30) horas.

2.1.4. Inmovilización del vehículo por tres (3) días hábiles.

El actuar desplegado por el CONDUCTOR conlleva al quebrantamiento de lo dispuesto en los preceptos mencionados y muy en particular a los contenidos en los siguientes articulados:

Constitución Nacional. Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

Código Nacional de Tránsito artículo 55. Comportamiento del conductor, pasajero o peatón. toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.

Por lo anterior, y con base en los Artículos 22 y 24 de la Ley 1383 de 2010 que modificaron los artículos 135, 136 de la Ley 769 de 2002, y de la Ley **1696 de 2.013**, Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo de alcohol u otras sustancias psicoactivas, esta Autoridad de Tránsito:

RESUELVE

PRIMERO: Declarar **CONTRAVENTOR** al Señor **DIEGO MAURICIO TAMAYO RODRIGUEZ**, identificado con **C. C. No. 6136244**, expedida en Palmira - Valle, conductor del vehículo de placa **GPM-112**, por contravenir la infracción F del artículo 5° de la Ley 1696 de 2013 encontrándose en **GRADO UNO**.

SEGUNDO: Imponer una **MULTA** de **CIENTO OCHENTA 180 SDMLV** que de conformidad con la ley 1955 de 2019, en concordancia con el Decreto 1094 del 3 de agosto de 2020 y la Resolución 001264 del 18 de noviembre de 2022 de la Dian, al ser convertidos en UVT, (unidad de valor tributario), pagaderos a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Palmira – Valle, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Sancionar al Contraventor con la Suspensión de la licencia de conducción No. **6136244** y demás licencias de conducción que le aparezcan registradas en el **RUNT** por el término de **tres (03) AÑOS** contados a partir de la ejecutoria

OFICIO

del presente proveído. Por lo cual se le prohíbe ejercer la actividad de conducción en vehículos automotores durante el tiempo de suspensión de la licencia, contados a partir de la ejecutoria del presente proveído.

CUARTO: Sancionar al contraventor con la inmovilización del vehículo de placa GPM-112 por tratarse de **GRADO UNO - PRIMERA VEZ**, en vigencia de la Ley 1696 de 2013, por el término de **TRES (03) DÍAS HABILES**, los cuales ya se cumplieron.

QUINTO: El **CONTRAVENTOR** deberá realizar Acciones Comunitarias para la Prevención de la Conducción bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas, por un término **TREINTA (30) HORAS** en el lugar que determine el Organismo de Tránsito.

SEXTO: En firme la presente decisión, remítase el expediente a la Dirección de Gestión de Cobro de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira para lo de su competencia, o verificado el pago, archívense de manera definitiva las presentes actuaciones.

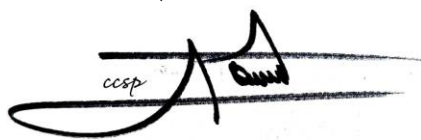
SÉPTIMO: Registrar en el **RUNT** y demás entidades pertinentes la anterior decisión y ordenar se adopten las medidas necesarias para la inscripción de la sanción.

OCTAVO: Para todos los efectos del Artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 24 de la Ley 1383 de 2010 esta diligencia corresponde a la celebración efectiva del proceso contravencional en tránsito.

NOVENO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de apelación.

DÉCIMO: La presente Resolución queda notificada en estrados - Teniendo en cuenta que el señor **DIEGO MAURICIO TAMAYO RODRIGUEZ** no se presentó a la audiencia, la presente Resolución será notificada de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



CRISTIAN CAMILO SOTO PIEDRAHITA
Inspector Segundo de Tránsito y Transporte

El inspector Segundo de Tránsito y Transporte de Palmira expidió la Resoluciones por la cual se resuelve de fondo, su situación en el proceso contravencional adelantado en el despacho de la inspección segunda del municipio de Palmira valle, de la cual se notifica por intermedio del presente aviso, TENIENDO EN CUENTA QUE NO HIZO PRESENCIA en esta dependencia, en la fecha y hora programada para la audiencia de fallo, a razón de lo anteriormente aludido, el despacho de la inspección segunda procede a notificarle del contenido de la resoluciones antes precitada, Por medio del presente aviso de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011.